



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010022335 DEL 24/06/2014
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de JORDÁN, departamento de SANTANDER, es de categoría 6, y fue prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, y para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010010585, del 07 de abril de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de JORDÁN, departamento de SANTANDER, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en los artículos 3° del Decreto 1639 de 2013.

a) Reportar al SUI, respecto de los servicios que preste directamente, la certificación emitida por el tesorero municipal o quien haga sus veces donde conste el traslado contable de los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos a las cuentas separadas donde se lleva la contabilidad de los servicios públicos domiciliarios que presta el municipio de manera directa y para cada uno de los mismos.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

En caso de no poder acreditar el anterior criterio, el municipio podía cumplirlo con: a) Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. b) Giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA, d) Reporte al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010010585 del 07 de abril de 2014.

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010010585, del 07 de abril de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de JORDÁN, del departamento de SANTANDER, mediante el oficio No. SSPD 20144010192441, del 07 de abril de 2014 enviado por correo certificado el 11 de abril de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Atendiendo la anterior citación, compareció ante esta entidad el día 23 de abril de 2014, el señor Ciro Antonio Bautista Bayona, alcalde municipal de JORDÁN, del departamento de SANTANDER, quien se notificó en forma personal del citado acto administrativo.

Ahora bien, el señor Ciro Antonio Bautista Bayona, en su calidad de alcalde del municipio de JORDÁN, del departamento de SANTANDER, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20145290236842, del 09 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010010585, del 07 de abril de 2014.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de JORDÁN, del departamento de SANTANDER, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, toda vez que fue puesto en correo certificado el 08 de mayo de 2014; que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290236842, del 09 de mayo de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"2.1. El municipio de Jordán – Santander es prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

2.2. Conforme a la parte motiva de la resolución SSPD 20144010010585, en relación a los criterios generales para que las entidades territoriales se certifiquen en el manejo de los recursos de APSB recursos SGP en términos del párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, aspecto (2) creación y puesta en marcha del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, la Superintendencia alude presunto incumplimiento en cuanto a la omisión en el giro a los prestadores de los recursos de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo durante la vigencia 2012.

Al respecto debo manifestar que el municipio de Jordán no traslado (sic) recursos del fondo de solidaridad en la vigencia 2012 por cuanto se había iniciado el cobro de los servicios públicos en el casco urbano por cuanto la planta de tratamiento no se había terminado y el agua no se estaba tratando y además solo se cuenta con diecinueve (19) suscriptores activos lo cual financieramente no se consideraba viable, sin embargo a partir de la entrada en funcionamiento de planta de tratamiento a finales de 2012 se inició con el

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

cobro y aplicación de subsidios en la vigencia 2013 y en la actualidad ya se encuentra en normal funcionamiento el fondo de solidaridad (anexo factura de cobro de servicios y certificación de tesorería que ya se reportó al SUI).

2.3. Referente a la supuesta extemporaneidad del reporte en el SUI del requisito "certificación de tesorería de asignación de recursos del FSRI no se le puede endilgar incumplimiento al municipio de este requisito, por cuanto esta certificación fue reportada dentro del plazo establecido, que según lo normado por artículo 7 del decreto 1639 de 2013 el reporte de información se debería realizar a más tardar el 30 de Agosto de 2013, de lo cual la misma Superintendencia de fe en lo argumentado en la resolución de la referencia, que esa información se encontraba ya reportada a la fecha de cierre del plazo establecido, sin embargo la certificación reportada en la fecha antes mencionada contenía un error de transcripción relacionado con la vigencia para el cual se certificaba, de lo cual fuimos advertidos en uno de los foros realizados para temas de certificación en la ciudad de Bucaramanga el día 27 de agosto de 2013, ante esta situación el municipio a iniciativa propia solicitó a la oficina de informática del SUI mediante oficio del 28 de agosto de 2013 radicado SSPD No. 20135290448312, reversión del formato para reportar la certificación de asignación de recursos para los tres servicios, la cual aprobada y nuevamente cargada al SUI, este hecho igualmente es prueba que el municipio si había cargado el documento solicitado en este requisito dentro del tiempo estipulado y que la Superintendencia obtuvo la corrección antes de la fecha de entrar a decidir sobre la certificación.

Si bien es cierto, mediante el radicado 20131800595361, se le informó al municipio que el coordinador del grupo SUI, autorizó la reversión de la información solicitada, no se le informó mediante ningún otro medio de la fecha en que fue ejecutada la aprobación de la reversión por parte de la oficina de informática del SUI, a fin de cargar la información conforme a los plazos establecidos en la resolución 20121300035485 de 2012, ante lo cual, el Municipio realizó nuevamente el cargue una vez notó al ingresar al aplicativo que estaba dispuesto para el nuevo cargue, puesto que el oficio 20131800595361, no le dio a conocer la fecha exacta de retiro de la información por parte de la oficina de informática del SUI.

Por lo tanto no se le puede imputar el incumplimiento en este aspecto por las siguientes razones:

- En primer lugar el municipio cargó en las fechas establecidas la certificación de tesorería solicitada por el requisito, prueba de ello, son los oficios 20131800595361 y 20135290448312.
- Igualmente, el municipio no fue informado formalmente dentro del proceso del expediente que obra para efectos de certificación, de las correcciones que había que hacerse ni de los tiempos aplicables en el reporte de la información en caso de reversiones de información reportada, lo cual aplica para calidad de la información, pues fue iniciativa del municipio realizar las correcciones con la solicitud de reversión que al ser nuevamente cargada por obvias razones iría a aparecer con fecha posterior al 30 de agosto de 2013 que era la fecha límite.
- Así mismo, dentro del periodo de pruebas decretado por Superintendencia (sic) mediante Auto No. SSPD 20134010020396, no se le solicitó al municipio pruebas para desvirtuar la presunta extemporaneidad en el reporte para que el municipio rindiera las explicaciones y adicionara los documentos necesarios, tal y como lo establece el Decreto 1040 de 2012 artículo 11 inciso 3°, al preceptuar que la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad competente para el monitoreo de los recursos del SPG-APSB podrá verificar por cualquier medio la información reportada por las entidades territoriales, respecto de lo que les compete en materia de certificaciones. Y para tal efecto podrá entre otras cosas, solicitar soportes adicionales, confrontar información reportada en otras fuentes y adelantar la constitución de pruebas adicionales para verificación de la información reportada; y en el caso de marras, la Superintendencia no acudió a la aplicación de la parte final de la norma citada y dio prevalencia a las formalidades de fechas de cargue de información, desconociendo lo sustancial, que es el contenido de los documentos allegados y cargados en el SUI antes de la fecha de decisión sobre la certificación, lo cual contraría los postulados constitucionales artículo 228, de la prevalencia del derecho sustancial sobre las normas que no debe convertirse en un obstáculo para la efectividad de los derechos de las entidades territoriales, sino que deben propender por su

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

realización, en concordancia con lo dispuesto por el C.P.A.CA. artículo 3° numeral 11 que a su tenor literal expresa:

(...) 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para tal efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con este código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

Con fundamento en las anteriores consideraciones y en aplicación de prevalencia de lo sustancial y eficacia, solicito a la Superintendencia de Servicios Públicos que se revoque la decisión proferida mediante resolución SSPD 20144010010585 del 07/04/2014, por cuanto el municipio de Jordán viene cumpliendo el otorgamiento de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo como lo contempla la norma y no reportó de manera extemporánea la certificación de tesorería de lo cual ya se rindió las explicaciones y soportes necesarios para probar que el municipio no ha incumplido los requisitos para la obtención de la certificación en el manejo de los recursos de Agua Potable y Saneamiento Básico".

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado No. SSPD 20145290236842, del 09 de mayo de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Certificación expedida el 27 de febrero de 2014, por medio de la cual el secretario de hacienda municipal de Jordán, señala que *"durante la vigencia 2013 se giraron recursos a las cuentas de la Unidad de Servicios Públicos por concepto de pago de subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de los usuarios de los servicios públicos así (...)"*. (Folio 8).

3.3.2. Oficio radicado con el No. SSPD 20135290448312, del 30 de agosto de 2013, por medio del cual el municipio solicitó a la Oficina de Informática de la SSPD la reversión de formatos. (Folio 9).

3.3.3. Oficio radicado con el No. SSPD 20131800595361, del 17 de septiembre de 2013, mediante el cual el Coordinador del Grupo SUI, autorizó la reversión. (Folios 10-11).

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito: Reportar al SUI, respecto de los servicios que preste directamente, la certificación emitida por el tesorero municipal o quien haga sus veces donde conste el traslado contable de los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos a las cuentas separadas donde se lleva la contabilidad de los servicios públicos domiciliarios que presta el municipio de manera directa y para cada uno de los mismos.

Afirma el recurrente que la presunta extemporaneidad del reporte en el SUI del requisito *"Certificación de tesorería de asignación de recursos del FSR"* no se le puede endilgar al municipio porque, señala, fue reportada dentro del plazo establecido en el artículo 7° del Decreto 1639, sin embargo, manifiesta, la certificación reportada en la fecha antes mencionada contenía un error de transcripción relacionado con la vigencia para el cual se certificaba, ante lo cual solicitó al SUI mediante oficio del 28 de agosto de 2013, radicado SSPD No. 20135290448312, la reversión de dicho formato, la cual fue aprobada por esta SSPD y nuevamente cargada al SUI. Advierte el impugnante que *"este hecho igualmente es prueba que el municipio si había cargado el documento solicitado en este requisito dentro del tiempo estipulado y que la Superintendencia obtuvo la corrección antes de la fecha de entrar a decidir sobre la certificación"*.

De otra parte argumenta, que mediante el radicado SSPD 20131800595361, el Grupo SUI le informó al municipio que se había autorizado la reversión de la información solicitada, pero que *"no se le informó mediante ningún otro medio de la fecha en que fue ejecutada la aprobación de la reversión por parte de la oficina de informática del SUI, a fin de cargar la información conforme a los plazos establecidos en la resolución 20121300035485 de 2012, ante lo cual, el Municipio realizó nuevamente el cargue una vez notó al ingresar al aplicativo que estaba dispuesto para el nuevo cargue, puesto que el oficio*

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

20131800595361 no le dio a conocer la fecha exacta de retiro de la información por parte de la oficina de informática del SUI".

De cara a las argumentaciones del ente territorial, esta SSPD señala:

Al revisar el cumplimiento por parte del municipio de Jordán, de los criterios señalados en el Decreto 1639 de 2013, para el SPG-APSB, vigencia 2012, esta entidad advirtió que el citado municipio había solicitado una reversión al Grupo SUI, con fecha 30 de agosto de 2013, de los formatos "Certificación asignación de recursos FSRI", para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, razón por la que este ente de control debía verificar si el reporte del acto referido se había hecho dentro del plazo efectuado por la dependencia encargada de autorizar la reversión, habida cuenta que si bien es cierto, cargó un primer documento dentro del plazo señalado por el Decreto 1639 de 2013, también lo es, que dicho documento se retiró para reportar la nueva certificación en virtud de la reversión autorizada y el nuevo plazo otorgado, de ahí que se debía constatar por este ente de control estos nuevos ítems y no los anteriores.

Fue así como la prueba decretada dentro de esta actuación tuvo como fundamento establecer si el cargo de información que había efectuado el día 24 de octubre de 2013, el municipio de Jordán al SUI de los formatos "Certificación asignación de recursos FSRI", para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, pese a ser objetivamente extemporáneo de acuerdo con el plazo máximo fijado por el Decreto 1639 de 2013 (30 de agosto de 2013), estaba dentro del término fijado por la Oficina de Informática de esta entidad, atendiendo la solicitud de reversión que el ente municipal había pedido al Grupo SUI.

De acuerdo con la respuesta que el Grupo SUI remitió a esta actuación, se estableció que con radicado SSPD 20131800595361, del 17 de septiembre de 2013, esa dependencia atendiendo la petición de reversión del municipio, le informó que *"para efectuar el retiro de la información que tenía cargada y el reporte de la información nueva, dispone de un término de siete días hábiles, una vez la Oficina de Informática haya ejecutado la aprobación"*, y que la Oficina de Informática de la SSPD ejecutó la aprobación de la reversión el día 30 de septiembre de 2013.

Así mismo se verificó que el radicado SSPD 20131800595361, fue recibido en la Alcaldía Municipal de Jordán el 1° de octubre de 2014, de acuerdo con el certificado de entrega expedido por la empresa de Servicios Postales Nacionales y con el acuse de recibido que aportó el mismo municipio con el recurso interpuesto.

En estas condiciones, resulta evidente que desde el mismo momento en que el ente territorial tuvo conocimiento de la autorización de la reversión, debía haber realizado todas las acciones tendientes para cargar en el SUI la certificación que se exigía para los formatos "Certificación asignación de recursos FSRI", para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, dentro del nuevo plazo que se le había otorgado, pero no lo hizo; en otras palabras, como la Oficina de Informática había ejecutado la aprobación de la reversión el 30 de septiembre de 2013, y el 1 de octubre de 2013 el ente territorial recibió la comunicación de la reversión, desde ese mismo día (1 de octubre de 2013), el municipio podía haber ingresado al SUI para efectuar el referido cargue, máxime si se le dio un término perentorio para tal efecto.

Es decir, los 7 días hábiles vencían el 9 de octubre de 2013, y si en gracia de discusión se admitiera que dicho plazo empezara a correr desde el día siguiente en que conoció el oficio de autorización de la reversión, esté término vencía el 10 de octubre de 2013. Ahora bien, argumenta el ente municipal en su recurso que no se le comunicó *"mediante ningún otro medio de la fecha en que fue ejecutada la aprobación de la reversión por parte de la oficina de informática del SUI"*, pero olvida el municipio que con el oficio del Grupo SUI que recibió el 1 de octubre de ese año, tenía el deber de verificar si ya podía efectuar el reporte en el SUI, y no esperar más de 20 días de recibida la comunicación para acceder al Sistema y cargar la certificación, como ocurrió. Haber actuado de forma contraria a como lo hizo, le habría permitido reportar la información dentro del término otorgado por el citado Grupo.

Sin embargo, como el ente territorial sólo cargó la certificación requerida hasta el 24 de octubre de 2013, debemos señalar que con dicho documento no es viable proceder a acreditar el presente requisito, ello debido a que el mismo fue presentado en forma extemporánea situación que no se encuentra acorde con la normatividad que regula el proceso de certificación; debemos recordar que si bien el Decreto reglamentario 1639 de 2013, señaló como criterio para la vigencia 2012, el reporte "certificación emitida por el tesorero municipal o quien haga sus veces donde conste el traslado contable de los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos a las cuentas separadas donde se lleva la contabilidad de los servicios públicos domiciliarios que presta el municipio de manera directa y para cada uno de los mismos," no podemos olvidar que esta norma también estableció obligaciones formales que los Entes

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Territoriales debían cumplir para acreditarlo y así evitar la descertificación; de esta manera encontramos conforme al artículo 7° de la citada disposición, que la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013, pero como para este caso hubo una excepción a esa regla, atendiendo la reversión que autorizó el Grupo SUI, en la que fijó un nuevo plazo para el reporte de la información – 7 días hábiles -, y por consiguiente, era dentro de este plazo que debía reportar el municipio el acto pedido.

Recuérdese que los municipios y distritos contaban con unos términos claros, precisos y perentorios los cuales esta Superintendencia como autoridad certificadora debía corroborar; actuar en otro sentido obviando tal señalamiento, sería desconocer el principio de legalidad y poner en situación de desigualdad a aquellos entes a los que se les exigió el cumplimiento de los requisitos conforme a los parámetros ya mencionados.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así¹: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de estrípe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que al dejarse vencer el término señalado para reportar la información en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta superintendencia consistía en descertificar al municipio de Jordán.

Es necesario aclarar que, no es cierto que con la descertificación del municipio de Jordán, según lo afirma el recurrente, esta superintendencia haya hecho prevalecer una forma procesal sobre el derecho sustancial. Según lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, el principio de la prevalencia del derecho sustancial constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico, el cual no es excluyente de las normas procesales ni preferente de las normas sustanciales. Sobre este tema la Corte se pronunció² y aclaró lo siguiente:

"(...) Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que; no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas(...)"

En consecuencia, no son de recibo los argumentos del recurrente cuando afirma que esta superintendencia violó el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

Por otro lado y teniendo en cuenta que dentro del escrito de impugnación no se observan argumentos sobre: a) giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, b) giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA y d) reporte al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios, esta entidad ratificará la información suministrada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, recibida mediante el oficio SSPD No. 20135290515162, del 3 de octubre de 2013 en la cual determinó el incumplimiento del requisito por parte de la administración de Jordán - Santander.

¹ Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería.

² Corte Constitucional. Sentencia C -1512 del 8 de noviembre 2000. MP Alvaro Tafur Galvis.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

4.2. Otras consideraciones.

Por último, esta entidad considera importante hacer referencia a la afirmación realizada por el representante del ente municipal en su recurso, en que señaló que *"el municipio de Jordán no trasladó (sic) los recursos del fondo de solidaridad en la vigencia 2012 por cuanto no se había iniciado el cobro de los servicios públicos en el casco urbano por cuanto la planta de tratamiento no se había terminado y el agua no se estaba tratando y además solo se cuenta con diecinueve (19) suscriptores activos lo cual financieramente no se consideraba viable, sin embargo a partir de la entrada en funcionamiento de planta de tratamiento a finales de 2012 se inició con el cobro y aplicación de subsidios en la vigencia 2013 y en la actualidad ya se encuentra en normal funcionamiento el fondo de solidaridad (anexo factura de cobro de servicios y certificación de tesorería que ya se reportó al SUJ)"*.

En relación con lo anterior, esta SSPD advierte que para la vigencia 2012, el municipio no puso en marcha el funcionamiento del FSRJ, toda vez que para tal fin, debía haber acreditado el traslado de los recursos del Fondo a las cuentas separadas donde se lleva la contabilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y de acuerdo con lo manifestado por el alcalde y que encuentra respaldo en la certificación que extemporáneamente cargo el ente municipal, éste sólo apropió los recursos pero no hizo traslado alguno a la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Jordán.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Ciro Antonio Bautista Bayona como alcalde municipal de Jordán, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010010585, del 07 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de JORDÁN, departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Ingrid Samantha Norato Vargas - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Samuel Alfonso Forero - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094016889580975A